

Periódico del Partido Socialista de los Trabajadores
Licencia Mingobierno N° 03056



📍 Carrera 13 N° 24A-10 Of. 402
🌐 www.facebook.com/pst.litci/
✉ pstcolombia@yahoo.com
🌐 www.pstcolombia.org
Bogotá (Colombia)

El Socialista 717

Julio · 2018

Nuevamente el uribismo en el gobierno



¡Enfrentarlo con la lucha y la movilización!

**PETRO:
¿Y ahora qué?**



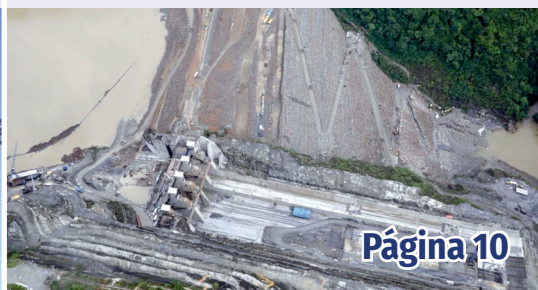
Página 4

**Las herencias de Santos profundizan
el sometimiento al imperialismo**



Página 8

**Cuando el capitalismo
desborda la vida**



Página 10

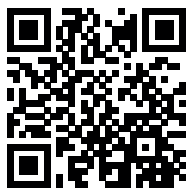
Lanzamiento del canal Marxismo Vivo



youtube.com/user/litci01



Cada semana, Marxismo Vivo presenta un programa sobre temas de actualidad política desde una visión de análisis marxista y reflejando las posiciones más destacadas de la LIT.



Presentación del canal
Marxismo Vivo



80 años de la IV
internacional



Visite nuestros sitios web:



pst.org



litci.org



laboursolidarity.org

Caricatura



Duque: la nueva cara del viejo uribismo

Es un hecho que el partido ganador de las elecciones presidenciales es el Centro Democrático (CD) dirigido por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez. La estrecha relación entre éste y el electo presidente Iván Duque es inocultable. Alicia Arango, jefe de debate de Duque afirmó categóricamente que “Uribe es nuestro jefe” y Alberto Carrasquilla, ex ministro de Hacienda del gobierno Uribe, es el jefe del equipo de empalme entre los gobiernos saliente y entrante. Qué tanto será Duque títere de Uribe, está por verse, pero es indiscutible que su política está en la misma línea del viejo uribismo.

Iván Duque no se ha posesionado pero ya la bancada del CD y sus aliados en el Congreso, obtienen un primer triunfo en la reglamentación de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) al introducir modificaciones como la creación de una sala especial con magistrados distintos a los de la JEP –utilizando el argumento de que los magistrados de la JEP son de “izquierda”– para juzgar a los militares. Lo que busca el uribismo es impunidad para militares y paramilitares, y por supuesto cubrir a su Jefe de nuevas acusaciones, además, que todos los excesos de la guerra los paguen solo la Farc. Sobre las modificaciones aprobadas queda todavía parte del trámite y falta la opinión de la Corte Constitucional, si son o no constitucionales. A la vez anuncia, que impondrá nuevas condiciones para negociar con el ELN, el retorno a la fumigación aérea de los cultivos de coca, otra reforma tributaria para favorecer a las grandes empresas, a

los trabajadores del sector público amenaza con un severo recorte del gasto y una reforma pensional que afectará a todos los trabajadores y, que según dice, no aumentará la edad de pensión, pero acabará con el régimen de prima media para igualarlo al de los fondos privados de pensiones. La seguridad dice ser una de sus prioridades. La pregunta es ¿desmovilizada la guerrilla, encontrará justificación para mantener la misma política de Seguridad Democrática de Uribe?

Es evidente que Duque y la nueva generación de uribistas están empeñados en aparecer como algo distinto de Uribe. Como tecnócratas jóvenes, preparados y eficientes, no como el terrateniente, domador de caballos y jefe paramilitar. Es el nuevo ropaje de la derecha mundial, pero con un discurso que raya con el fascismo, defendiendo abiertamente sus posiciones. Su discurso de triunfo electoral estuvo centrado en la unidad y el demagógico slogan de un gobierno para todos. Se permite este tono conciliador sobre la base de su triunfo, después de agitar durante su campaña contra los que “destruyen” y los que siembran “el odio de clase”, de azuzar el odio contra las guerrillas, contra los despojados de sus tierras, contra los que luchan por sus derechos, ahora, que ha logrado el triunfo dice que hay que dejar atrás los odios, las rencillas y que hay que pasar la página. Peligroso y hábil, porque se apoya en el sentimiento de hastío de la población más pobre y golpeada por tantos años de guerras de aparatos, de muerte y de impunidad.

Prepararnos para profundizar la lucha

El uribismo ganó, pero se nota cierto desgaste. A diferencia de las dos elecciones en las que triunfó Álvaro Uribe, en 2002 y 2006, quien ganó en primera vuelta y con amplio margen, Duque tuvo que pasar por dos vueltas y ganar la segunda a un competidor identificado como de izquierda, que creció porcentualmente mucho más que él. Entre la primera y la segunda vuelta Petro crece más no solo en términos porcentuales sino en votos absolutos. Este hecho reviste muchísima importancia. Hemos venido afirmando que Petro logró canalizar un proceso de rompimiento de sectores importantes de trabajadores con los partidos tradicionales, con los partidos de la burguesía, un proceso de bronca creciente, de cansancio ante tanta desigualdad social, potenciado por la unidad de todos los partidos de la burguesía para la segunda vuelta, quedando de manera nítida como la unidad de los de arriba por la defensa de sus intereses de clase.

Ese proceso que se expresó en los más de 8 millones de votos contra Duque, es el punto de partida para organizar un gran movimiento de los trabajadores, que de manera independiente y en unidad con los campesinos pobres, indíge-

nas, comunidades afro empobrecidas, y sectores populares, se levante como un solo puño para combatir desde el primer día a su enemigo número uno: el gobierno de Iván Duque y a su política de acuerdos con el imperialismo yanqui. Hay que preparar desde ya un gran Encuentro Nacional, Obrero y Popular que enfrente y derrote las reformas tributaria y pensional. Sigamos el camino de los trabajadores, argentinos, brasileros, nicaragüenses, venezolanos y hondureños que han enfrentado con la movilización permanente las políticas de sus gobiernos en contra de su nivel de vida y de los derechos del pueblo trabajador. Gustavo Petro tiene una enorme responsabilidad con esos millones de trabajadores que votaron por él contra la burguesía y con los que lo votamos críticamente. No se puede quedar en la anunciada oposición parlamentaria, allí no se va a lograr nada. Solo la movilización callejera, la huelga, el paro nacional podrán derrotar a este gobierno e impedir que esta ruptura que se está produciendo con los explotadores se pierda y retroceda.

junio 25 de 2018

Comité ejecutivo del PST

Elecciones, independencia política y solidaridad de clase

Posiblemente, el mayor logro del proceso electoral que acaba de terminar es el de haber politizado a amplias capas de la población. Colombia es un país cuya historia ha estado atravesada por la violencia y la guerra protagonizadas por los aparatos armados de la burguesía, los terratenientes y la guerrilla campesina.

Y esa particularidad que afectaba, directa o indirectamente a todas las regiones y a todas las clases, distorsionaba los procesos políticos y sociales, desde las elecciones hasta las huelgas y movilizaciones de masas. Todos los últimos gobiernos del país fueron elegidos en función de las posiciones y políticas de los candidatos y de la evolución de la opinión pública frente al conflicto armado. Y todas las luchas obreras y populares, casi sin excepción, fueron calificadas y reprimidas por la burguesía y el régimen político por el estigma de la influencia de la guerrilla entre las masas.

Los pasados 27 de mayo y 17 de junio, por primera vez en sesenta años, más de la mitad de la población participó en un proceso electoral burgués relativamente al margen del conflicto armado. Y a pesar de que –desde luego– mantuvieron su peso todos los vicios de la democracia burguesa –la corrupción, el clientelismo y la compra de votos– amplios sectores de los trabajadores y la clase media se expresaron con una independencia poco común en el país. Los casi nueve millones de votos obtenidos en la primera vuelta por el movimiento centrista burgués de Fajardo y el pequeñoburgués de Petro sumados, fueron la primera gran expresión del surgimiento de una opinión política por fuera de la influencia ejercida por la violencia política de los aparatos armados militares, paramilitares y guerrilleros. La bajísima votación obtenida en las elecciones parlamentarias por el partido conformado por los desmovilizados de las Farc (50.000 votos) ya había mostrado el cansancio de los trabajadores con el método guerrillero. Pero esas votaciones también expresaron la pérdida de temor de los trabajadores a la violencia militar y paramilitar burguesa, y un primer rechazo a la corrupción política de las empresas electorales regionales dominadas por el parasitismo de los contratistas. La baja votación por Germán Vargas Lleras, que contaba con el apoyo de las maquinarias electorales más aceitadas y con un multimillonario presupuesto, y la casi nula obtenida por Humberto de la Calle, candidato del Partido Liberal

son la muestra más palpable de este sentimiento de masas.

El surgimiento de esa expresión de independencia política se constituyó en la mayor fuente de temor y odio de la reaccionaria burguesía colombiana –acostumbrada a ejercer el poder del Estado sin la preocupación de una población politizada– que se encontró de sopetón con una expresión de masas libre de la losa opresiva del estigma guerrillero y decidida a sacudirse el control de los aparatos políticos tradicionales.

La polarización de la segunda vuelta

Desde 1970 –cuando la Anapo de Gustavo Rojas Pinilla amenazó el control burgués tradicional del aparato de gobierno– la burguesía colombiana no experimentaba un temor similar ni un odio de clase tan exacerbados contra una expresión electoral, como los que evidenció frente a la candidatura de Gustavo Petro en la segunda vuelta. Ni mostraba una solidaridad de clase y una decisión de unidad frente a los trabajadores y los pobres como la que concretó en el lapso de una semana. Ante la posibilidad de un triunfo electoral del candidato de la Colombia Humana depusieron sus diferencias y se unieron, en santa alianza, los hasta el día anterior aparentes enemigos políticos irreconciliables. Uribistas, santistas, vargaslleristas, liberales, conservadores, pastores evangélicos, jerarcas de la Iglesia, exmilitares, exparamilitares, gremios económicos, contratistas, corruptos indiciados y moralistas de dudosa ortografía cerraron filas en torno al candidato de todos los privilegiados y explotadores del país. Unos pocos demócratas burgueses vergonzantes y el MOIR (un grupo oportunista cada vez más ajeno a los intereses de los trabajadores) llamaron a votar en blanco favoreciendo, en los hechos, al ultrareaccionario Iván Duque. Dieron una muestra irrefutable de cómo se van a comportar frente a cualquier intento de los explotados que amenace sus privilegios y su control de las instituciones del Estado. Van a cerrar filas para enfrentar-

nos. Y no dudamos que lo harán violentamente de ser necesario.

No obstante los esfuerzos políticos y financieros –legales e ilegales– a los que recurrió el conjunto de la burguesía para derrotarlo, Gustavo Petro obtuvo más de ocho millones de votos de trabajadores y sectores medios, la mayor parte de los cuales fue a los puestos de votación de manera independiente para expresar su repudio a la corrupción generalizada, a las miserables condiciones de vida, a la violencia militar y paramilitar, y al monopolio político que han detentado por centenares de años los aparatos burgueses tradicionales. Con instinto de clase, los trabajadores respondieron a la unidad burguesa de hecho con la mayor votación obtenida por un candidato de oposición al bipartidismo y a la política tradicionales.

Los trabajadores y los pobres tenemos que aprender de las lecciones que nos han dejado las recientes elecciones.

De lo primero que tenemos que hacer plena conciencia es de que hay una nueva situación: un proceso masivo de politización de los trabajadores y los explotados que, de manera superestructural, se empezó a manifestar en las últimas elecciones.

En segundo lugar tenemos que ratificar que la masiva votación por Petro pone de presente que de nuestro lado está el número. Los trabajadores y los pobres somos millones y ellos apenas un puñado de explotadores privilegiados que nos mantienen sometidos solamente por nuestra desunión y nuestro retraso político y organizativo. Por tanto, al número debemos agregar la unidad, la organización y la conciencia política de clase. A su conciencia y solidaridad de clase burguesa debemos oponer la conciencia y la unidad de clase obrera y popular.



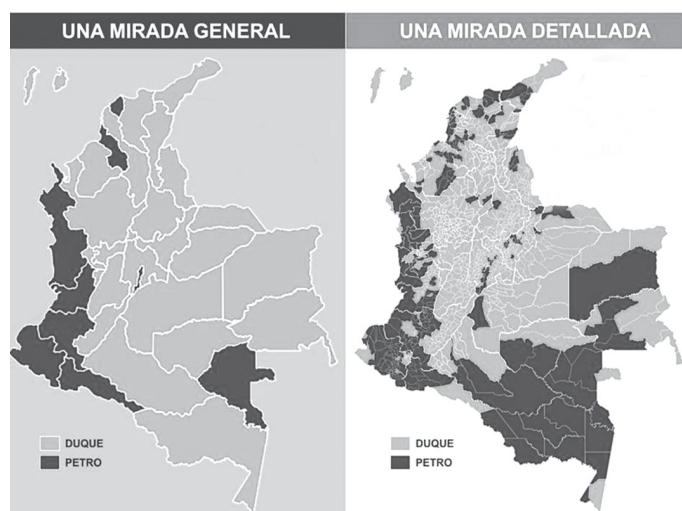
O.A.

La salida es la lucha

El desarrollo de la lucha, en los próximos años del gobierno de Duque, nos irá dando las posibilidades y nos irá mostrando el camino. Un camino que deberá llevarnos al gobierno de los trabajadores y al socialismo, mucho más allá de las intenciones y los deseos políticos del propio Gustavo Petro que se quedan en los marcos de los mecanismos electorales de la recortada democracia burguesa y del capitalismo con rostro humano.

PETRO: ¿Y ahora qué?

La candidatura de Gustavo Petro a la presidencia generó una gran expectativa entre amplios sectores populares, juveniles, de trabajadores y clase media democrática. La polarización electoral se tradujo en un enfrentamiento de “pobres” contra “ricos” como se puede deducir sin mucho esfuerzo de la distribución de la votación en las zonas geográficas del país, e incluso en los sectores barriales al interior de las ciudades, tanto en la primera como en la segunda vuelta.



Mapa comparativo de los resultados electorales de la segunda vuelta entre departamentos y municipios

Petro barrió en las zonas más empobrecidas y dónde se han protagonizado las luchas sociales más radicales en los años recientes. El programa reformista de la Colombia Humana fue interpretado como la síntesis de reivindicaciones sociales, ambientales y culturales negadas por quienes monopolizan la riqueza y el control del Estado. Pero, después de haber logrado llevar a las urnas ocho millones de votos, miles de activistas de base –a quienes Petro reconoció como las “abejitas” de la campaña– se preguntan: ¿Y ahora qué vamos a hacer?

La fuerza de una ilusión

El movimiento electoral que respaldó a Gustavo Petro y a Colombia Humana expresó en las urnas una ilusión progresiva. En diversos momentos de la historia de Colombia, el pueblo llano ha tratado de liberarse de una casta de politiqueros corruptos que administran el Estado al servicio de sus mezquinos intereses y de los grandes empresarios que financian sus campañas, votando por movimientos de oposición, pero ésta siempre terminó integrada a los partidos tradicionales o perseguida hasta el genocidio.

La existencia de la guerrilla le permitió por décadas a la burguesía justificar su régimen antidemocrático en el terreno electoral. Pero en esta ocasión

las urnas expresaron la nueva realidad del “posconflicto”, la crisis casi terminal de los partidos liberal y conservador y, al tiempo que se consolidaba un polo de derecha –el Centro Democrático–, emergió un polo de “izquierda” –la Colombia Humana de Petro– que logró arrastrar al “centro” representado por Sergio Fajardo en la primera vuelta.

No debemos olvidar que todo ha sido en el terreno electoral, plagado de contradicciones, intereses particulares y tensiones políticas que hacen que lo aparentemente sólido se pueda desvanecer en el aire.

Los doce mandamientos capitalistas

Una buena expresión de lo deleznable que puede ser el movimiento electoral que respaldó a Petro, fueron los doce mandamientos con los que se comprometió para ganar el apoyo oficial del Partido Verde y de franjas de liberales que desacataron la orientación de su partido. El primero de ellos “No voy a expropiar” lo compromete a respetar la “sagrada” propiedad privada de los medios de producción (tierra, industria, bancos) que impide el desarrollo de grandes planes de obras públicas que podrían brindar trabajo formal a millones de desempleados y mejorar las condiciones de otros millones sometidos a la infame tercerización laboral. El segundo “No voy a convocar una Constituyente” bloquea hasta la más tímida reforma al régimen político autoritario con los que los grandes cacaos nacionales y las transnacionales han mantenido sometida y explotada a la absoluta mayoría de la población. Esos dos mandamientos invalidan los otros diez que quedan reducidos a puras promesas y buenos deseos, pues todo se reduce al objetivo de “desarrollar el capitalismo” como declaraba el candidato y a respetar la Constitución de 1991 bajo la que se han hecho más ricos los ricos y más pobres los pobres.

Durante la campaña, Petro repitió hasta el cansancio que “no era de izquierda” y mucho menos “socialista”. Ofreció sin pudor inmunidad para Álvaro Uribe y sus propiedades mal habidas, pues está por la reconciliación de las víctimas con los victimarios. Pero la burguesía, que no quiere correr riesgos, decidió cerrar filas detrás de Iván Duque, polarizando la elección. En lugar de responder al reto, apoyándose en las “abejitas” obreras, populares, campesinas, indígenas y juveniles e invitar a la

movilización de los abstencionistas hacia las urnas para derrotar el frente burgués de derecha, Petro prefirió buscar el respaldo de los “zánganos” del centro diluyendo la miel de la inconformidad.

¿Oposición parlamentaria y estrategia electoral, o movilización de protesta y revolución social?

El 17 de junio, al final de la jornada electoral, Gustavo Petro se presentó como jefe de la oposición al gobierno de Duque y le anunció a sus votantes que “ahora quiero ser su dirigente”. No está claro que, más allá de las intenciones personales de Petro, Colombia Humana se consolide como una organización partidaria de carácter nacional que esté en capacidad de enfrentar las poderosas maquinarias de los partidos que se agruparon detrás de Duque, cuya influencia clientelista ahora será mayor. Tampoco hay ninguna garantía que la coalición que lo acompañó en la segunda vuelta se mantenga unida para la próxima disputa electoral.

El propósito manifiesto de quienes acompañan a Petro es prepararse para las elecciones de alcaldías, consejos, asambleas departamentales y gobernaciones de 2019. Utilizarán la tribuna parlamentaria para afianzar su posicionamiento político y colaborar para garantizar la estabilidad del régimen, buscando “acuerdos sobre lo fundamental” con el gobierno de Duque y sus secuaces en el Congreso. Así lo lograron con la aprobación unánime de la Consulta Anticorrupción, apoyada por los más corruptos del Congreso de la República, en la que se despilfarrarán 300.000 millones de pesos del erario.

Pero el problema que enfrentan es que la angustia cotidiana del desempleo, los bajos salarios, el hambre, el desplazamiento campesino, la violencia terrateniente y el desmadre de la delincuencia común, sigue buscando una salida estructural. Ese será el acicate para nuevos procesos de movilización social como los que se han dado en los últimos años y que, en últimas, son los que se expresaron en las urnas como apoyo electoral a la propuesta de Petro. Y será en las calles, al frente de la movilización de protesta, y no en el corrupto y controlado parlamento, dónde se verá si Gustavo Petro es el dirigente que dice ser.

Voto en blanco y crisis del Polo

Las pasadas elecciones presidenciales implicaron una reconfiguración del mapa político en Colombia, como un resultado inédito del proceso de paz, pues una vez los asuntos de la guerra o la negociación con las FARC pasaron a un segundo lugar en la agenda, quedaron en las discusiones de los trabajadores y los sectores populares otros temas: las EPS, la tenencia de la tierra y la necesidad de la expropiación, el cambio climático, el aumento en la edad de pensión, las horas extras a partir de las seis de la tarde, la tercerización y la estabilidad laboral y la Asamblea Constituyente.

Esta situación produjo un nuevo fenómeno político, la candidatura de Gustavo Petro, quien tuvo dos aciertos iniciales: las convocatorias masivas en las plazas y la agitación de un programa de reformas que si bien giraba en torno al desarrollo del ‘capitalismo productivo’, generaron en las masas una esperanza de cambio. Este programa fue retrocediendo a medida que avanzaba la campaña y en especial en segunda vuelta cuando firma el acuerdo con el Partido Verde, pero esas masas entendieron que debían seguir acompañando esta propuesta para detener un nuevo período de Uribe Vélez.

Los cálculos del Polo y los del MOIR

En medio de esta coyuntura apareció desde finales del año pasado la idea de una candidatura conjunta entre Sergio Fajardo de Compromiso Ciudadano, Claudia López del Partido Verde y Jorge Robledo del Polo Democrático. Este acuerdo fue liderado por el MOIR y el resto del Polo propuso que este escenario se abriera a candidaturas como las de Gustavo Petro y Humberto de la Calle en una candidatura que impulsara la defensa del Acuerdo de Paz con las FARC.

Pero el cálculo político de las fuerzas del Polo fue equivocado, en la agenda política de las masas el proceso de paz no era la propuesta aglutinadora, sino las reformas que aliviaran su situación frente a la salud, el empleo y sus problemas inmediatos. El cálculo del MOIR también fue errado, pues su apuesta fue hacer una candidatura en torno a la lucha anticorrupción, así sacrificara puntos de la agenda social en su acuerdo con un neoliberal como Sergio Fajardo.

De esta manera, la candidatura de Gustavo Petro fue ubicándose en consonancia con las reformas, hablaba en las plazas de los problemas de cada región y así su programa no diera soluciones de fondo a los mismos, iba generando un proceso de organización en esas regiones que iba más allá de las estructuras

de las organizaciones sociales y políticas que lo apoyaban.

El MOIR y el voto en blanco

Unas semanas antes de la primera vuelta, después de la consulta y las elecciones parlamentarias, era una realidad la nueva configuración del mapa político. Aparecía una candidatura por la ‘izquierda’ que era la de Gustavo Petro, una candidatura de ‘centro’ que era la de Fajardo y una a la ‘derecha’ que era la del designado por Uribe Vélez.

En este proceso que el Partido Socialista de los Trabajadores propuso el voto crítico a la clase trabajadora, porque si bien el programa de Gustavo Petro no resolvía sus problemas fundamentales, era la posibilidad de organizar a los trabajadores en torno a un programa que fuera “más allá de la Colombia Humana”.

En el Polo Democrático, las fuerzas orientadas por los senadores Alexander López, Iván Cepeda y Alberto Castilla se dieron cuenta que la táctica del MOIR los había dejado atrapados en una candidatura que no solo tenía un programa ambiguo más orientado a dar tranquilidad a la clase media sino que era servil a la táctica del uribismo de desprestigiar la candidatura de Petro por extremista.

Los senadores del Polo pidieron libertad para votar pero al final tuvieron que aceptar la disciplina y marginarse de la campaña electoral hasta la segunda vuelta cuando fue aprobada. Así, la mayoría del Polo se fue con Gustavo Petro y el MOIR acompañó al neoliberal Sergio Fajardo en el voto en blanco, a pesar de que el Partido Verde se sumó a Gustavo Petro con un acuerdo en el que se renunciaba a hacer la Asamblea Constituyente.

La crisis del Polo

La situación poselectoral deja a Gustavo Petro como líder de la oposición parlamentaria en un Congreso de la República en el que el uribismo tiene amplias ma-

yorías que tendrá que mantener unificadas con burocracia y contratos, mientras las fuerzas llamadas alternativas – Polo Democrático, Partido Verde, Decentes y FARC – deben superar la fragmentación en la que quedaron después de las elecciones, en particular el Polo.

El Polo queda dividido en dos bloques, por un lado estarían el senador Robledo del MOIR y el empresario Pedro Leonidas Gómez y por otro los senadores López, Cepeda y Castilla. Para los primeros, que ahora representan el ‘centro’, se debe buscar una alianza con el Partido Verde y se separan de la idea de un ‘bloque de izquierda’, mientras que los segundos están pensando en esa alianza de fuerzas que se opongan al uribismo. Gustavo Petro, por su parte, ha planteado hasta el momento un acuerdo más allá del bloque parlamentario e incluso manifestó que era necesaria una oposición en las calles.

Jorge Robledo, presionado por sus aliados de la burguesía, le dio la espalda al progresivo proceso que se levantó por debajo de Gustavo Petro.



Antonio Romero

El voto crítico: una salida para la clase trabajadora

Para la clase trabajadora, el voto crítico, “más allá de la Colombia Humana”, le abrió la posibilidad de participar en este proceso de masas con independencia de clase, sin sumarse al vaivén del programa de Petro y hoy permite participar de la definición del rumbo que debe tomar la oposición, mientras que el voto en blanco dejó por fuera de este escenario a quienes lo apoyaron.

Para Sergio Fajardo no hay problema, nunca ha estado en la oposición y no lo estará, el uribismo ha sido su aliado natural además de su socio en sus intereses empresariales, pero al MOIR lo deja aislado y al Polo dividido.

Y una cosa es quedar aislados cuando la mayoría de la izquierda se ha sumado a una candidatura de derecha como en las presidenciales de 2014 en la campaña entre Santos y Zuluaga y otra cosa es quedar aislados cuando todo el establecimiento se ha sumado a una campaña contra la posibilidad del triunfo de una candidatura de izquierda. De esta manera, la verdadera oposición de los trabajadores y de la “izquierda” a la burguesía y sus partidos se va a medir en la lucha y en las calles.

Duque presidente: *Made in USA*

Los alborozados y generosos saludos de felicitación para Duque, provenientes del gobierno, de parlamentarios y del Departamento de Estado de Estados Unidos, son evidencia de la satisfacción y tranquilidad de los gringos ante la posibilidad invaluable de aplicación de su política con la total anuencia del gobierno colombiano, como ha sido habitual. Veamos.



Freddy Ruiz Ayala

La formación académica y el sector social que representa

Duque es un abogado, con estudios mayores de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda. Cursó maestría en Derecho Internacional Económico de la American University y Gerencia de Políticas Públicas de la Georgetown University. Cuenta con estudios ejecutivos en negociación estratégica, políticas de fomento al sector privado y gerencia de capital de riesgo de corta duración en la Escuela de Negocios y Gobierno de la Universidad de Harvard. Fueron 12 años de residencia y formación académica y política en Washington.

Es un hijo obediente de la burguesía, un discípulo destacado de la explotadora economía capitalista y de la política discriminadora, de los Estados Unidos. Su experiencia laboral con los imperialistas como representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es una pequeña muestra de su discipulado.

La paz y la política antidrogas

La portavoz del Departamento de Estado Heather Nauert dijo que EEUU trabajará con el presidente electo Iván Duque en el combate al tráfico de drogas, la seguridad, los derechos humanos y el aseguramiento de la paz.

Esto lo que significa es la profundización del “plan Colombia”, desplazando aún más a los campesinos que cultivan hoja de coca, fumigación con glifosato de los cultivos, extensión de operativos militares con participación directa de la DEA y judicialización de los campesinos que no acaten esta política.

En los acuerdos de la Habana, lo que está planteado es un programa de sustitución de cultivos (que no resuelve el problema de la subsistencia del campesino pobre), programas de prevención del consumo y la “intensificación de la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo”, es decir, todas las condiciones para que Estados Unidos aplique su política de no legalización y “solución” al problema por vía judicial (o extrajudicial), con destrucción de la naturaleza, en nombre de la paz y la seguridad.



Mediante una llamada telefónica, Trump felicitó a Duque por su política antidrogas.

La extracción minera

La “paz”, acordada entre Farc y gobierno Santos, en el terreno del desarme y la desmovilización, despejan los territorios de riqueza minera, de tal forma que ahora sin obstáculos armados y sin pago de “impuestos” extralegales, se podrá profundizar el fracking y la explotación de recursos minerales, tal como se ha anunciado en el lago de Tota y como se ha venido intentando en el páramo de Santurbán. Habrá entonces grandes facilidades en el gobierno Duque, para que las transnacionales gringas hagan su negocio.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. De acuerdo con los datos del Ministerio de Comercio, para el 2012, Colombia exportó US\$ 21.981 millones e importó US\$13.579. El sector minero-energético (mayoritariamente petróleo) es el principal rubro de exportación y representa el 84% del total; Colombia se ubica entre los diez primeros exportadores de petróleo a Estados Unidos, con 365 000 barriles diarios (Min comercio, 2012).

El control político militar y económico de la región

El ingreso de Colombia a la OTAN desde el punto de vista geopolítico es la puerta de ingreso de EEUU en sur América para desestabilizar definitivamente a Venezuela, pero también para disciplinar a los movimientos populares y controlar los gobiernos de frente popular que subsisten en el continente. Ya había un paso adelantado para la acción militar norteamericana con la instalación de 7 bases militares acordado por los gobiernos de Pastrana y Uribe.

Los obstáculos que interpusiera inicialmente el parlamento norteamericano a la ratificación del TLC, en materia de derechos humanos en Colombia, fueron teniendo un panorama distinto (al menos en el papel), luego de la pantomima de “desmovilización” de los grupos de autodefensa hecha por Uribe y el desar-

me y desmovilización de las Farc hecha por Santos, abriéndole pista al desarrollo económico de Duque, en favor de los burgueses nacionales y transnacionales.

A su llegada al gobierno el presidente Santos anunció su propósito de abandonar la visión de amigo-enemigo que había predominado durante el gobierno Uribe en el manejo de la política exterior. Santos asumía una actitud más pragmática; se trataba de diversificar las relaciones del país con el resto del mundo, al mismo tiempo que se mantendría una relación fluida y cooperativa con Estados Unidos para darle continuidad al respaldo militar, económico y político que había recibido el país a través del Plan Colombia.

Ahora Duque, el nuevo rostro del Uri-bismo, dará continuidad a este respaldo, estrechará lazos más fuertes con Trump, con quien comparte ampliamente la política exterior y la política económica.

Lo anterior significa además, una avalancha de productos agrícolas importados de Estados Unidos, con efectos perversos sobre el empleo y la producción de alimentos. Paralelamente, el incremento de monocultivos de la agroindustria para fabricación de combustibles.

Ya la situación del agro colombiano dio lugar a protestas sociales tales como el paro agrario nacional en agosto de 2013. La profundización de estos planes del gobierno Duque, muy probablemente desencadenará nuevas protestas.

Es natural que mientras arrecien los planes contra los trabajadores, los campesinos pobres, los maestros y los estudiantes; se hará más necesario arreciar en organización y movilización para frenar su aplicación y revertir esta nefasta política. Debemos tener claro que Duque es una ficha clave del imperialismo y de la burguesía nacional para recuperar la economía a favor de estos a costa de la miseria del grueso de la población. La lucha obrera, campesina y popular tendrá que tomarse las calles.

Duque, ¿hará trizas los acuerdos de paz?

Un funcionario para el posconflicto reconocía en su momento que en las zonas de donde iban a salir las Farc, no existían empresas privadas. Como conclusión, habría que incorporar al sector privado en el desarrollo de tales zonas. Manifestaba así su ambición de atraer al campo a la empresa privada. Precisamente como reconocimiento de que buena parte del conflicto armado se originó en el campo, los acuerdos de la Habana establecieron que el primer tema fuera *Hacia un Nuevo Campo colombiano: Reforma Rural Integral*, fórmula ambigua que expresa los propósitos de la burguesía, vale decir, el campo para los terratenientes, los capitalistas y las multinacionales.



Durante la campaña electoral del Centro Democrático, Duque aseguró que haría trizas los Acuerdos.

El carácter reaccionario de los acuerdos

Por supuesto que todos deseamos la paz, pero los trabajadores y los sectores populares han sido objeto de manipulación por parte de la burguesía. No es solo que esos acuerdos concedan beneficios al campesino rico, a los terratenientes, a la banca, etc. En general lo que se ha dado en llamar “el marco legal” de los acuerdos de paz, está plagado de lineamientos reaccionarios. Así, en *Participación Política* se mantienen las restricciones para la intervención partidista y gremial de los trabajadores en la vida política del país. De otro lado, el acuerdo sobre *El Fin del Conflicto* se ordena sobre una exaltación al aparato represivo del régimen y a pesar de que formalmente pretende cerrar el paso a grupos fuera de la ley, niega de hecho la posibilidad de que sectores obreros y populares puedan defenderse. En cuanto a drogas ilícitas y sustitución de cultivos, el acuerdo depende en gran medida de la manera como se solucione la supervivencia del campesino pobre. De resto ya lo reafirmaron los candidatos en la pasada campaña: el desenlace de este tema es de carácter represivo. En fin, podríamos seguir enumerando y evaluando la naturaleza reaccionaria de los acuerdos de La Habana y sus ajustes, como sucede con la Jurisdicción Especial para la Paz, que

constituye en última instancia un convenio para la impunidad. En tanto que de reparación individual y colectiva a los trabajadores, no hay una sola palabra.

Duque y la paz

La pregunta que se impone es si el nuevo Presidente va a desafiar y acabar con esos pactos. Duque ya dijo que no deseaba mantener la polarización entre amigos y enemigos de la paz. Su consigna es paz con correcciones a los acuerdos, un discurso engañosamente conciliador y de unidad, con un ingrediente que pudiera pasar inadvertido: la seguridad. Voy a obrar, dice, como comandante en jefe de los colombianos y aclara: “pero la seguridad no es violencia”. Sabemos lo que ha significado la seguridad estatal y para estatal para muchos colombianos, aunque también la guerrilla tuvo su cuota de despotismo y opresión en este aspecto.

De los acuerdos de paz lo que se ve ahora es un pulso en el que Duque y el uribismo tratarán de ganar más espacio en la JEP, para evitar protagonismo político de la Farc, al tiempo que favorecen a una buena parte de los victimarios del conflicto armado, afines a su ideología. Pero no están interesados en generar crisis al interior del régimen político, luego tampoco están empeñados en destruir los acuerdos de La Habana.

Fisuras y cierre en el Régimen político

Nuestra creencia es que desde antes de la elección de Duque, ya se mostraban rasgos de que el régimen se estaba fortaleciendo. La débil reacción del uribismo a la maniobra de Santos con el plebiscito demuestra que el juego de fuerzas inter burguesas sólo va hasta donde su instinto de conservación política les diga. Pero si se manifiestan eventualmente en los últimos tiempos signos de fisuras en el campo burgués, parecen enmarcados más bien en el recorrido de un régimen que tiende a robustecerse. Así, en los primeros momentos de la coyuntura electoral se dieron hechos de violencia física, y luego continuó un ambiente con agresiones verbales. De Petro se decía que incitaba al odio de clases y ahora Duque advierte que no gusta de la protesta social y prefiere la armonía entre empleadores y trabajadores, la unidad de clases. Colombia unida y para todos, país del emprendimiento ¿no se repitió esto en todos los discursos de los candidatos presidenciales? Es más, ¿no hay un requerimiento constante de todos hacia la clase media, como aspirando a disputarse la misma franja social? Adicionalmente otro elemento marca el comportamiento de las agrupaciones políticas: su recurso al pragmatismo. No hay problema en cambiar de aliados súbitamente pues no se juegan grandes riesgos en lo ideológico. Es la manifestación de la unidad sin principios que bien puede alimentar la unidad del régimen. Unidad a la que parecieran apuntar Petro y la Farc, cuando renuncian a buscar un cambio de sistema económico en lugar del capitalismo o cuando desisten de la convocatoria a una Asamblea Constituyente democrática como alternativa al mecanismo burocrático de los acuerdos entre Estado e insurgencia.

No se ve por ningún lado que haya hasta ahora enfrentamientos rotundos y concluyentes entre las agrupaciones burguesas y/o pequeño burguesas. De ser ciertos los elementos incipientes apuntados aquí, una dura tarea espera a las bases de los llamados partidos de izquierda, a las bases petristas, a las del Polo, a los trabajadores en general. Se trata de resistir mediante la movilización a las agresiones económicas y políticas de la burguesía y el imperialismo, pero también a las desorientaciones reformistas que tratan de enmascarar los objetivos y los enemigos del movimiento obrero y popular.

Ingreso de Colombia a la OCDE y la OTAN

Las herencias de Santos profundizan el sometimiento al imperialismo

Hacia finales de mayo, mientras la represa de Hidroituango estaba a punto de desbordarse, y la campaña electoral se encontraba en su máximo punto de polarización, Santos en su última correría por Europa, alegremente dio dos anuncios largamente anhelados por la burguesía colombiana: El ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la oficialización de Colombia como Socio Global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).



Comité Ejecutivo PST

El nuevo gobierno de Duque hereda estas dos decisiones que profundizan el sometimiento de Colombia al imperialismo.

Del Plan Colombia a la OTAN

La entrada de Colombia en la OTAN viene de un largo proceso de relaciones estrechas con el imperialismo yanqui en el terreno militar. No hay que olvidar que con el Plan Colombia y la excusa de la lucha contra el narcotráfico, Colombia pasó a ser el tercer país con mayor ayuda militar estadounidense, sólo por debajo de Israel y Egipto. Gracias a esto y al proceso de modernización y profesionalización de las fuerzas armadas, lograron golpes importantes a las guerrillas, especialmente a las FARC, a las que fueron golpeando hasta obligarlas a la negociación de su desarme.

Álvaro Uribe Vélez en su primer gobierno, con la política de la “Seguridad Democrática” buscó estrechar las relaciones militares con Estados Unidos ante la compra de armamento a Rusia por parte del gobierno venezolano de Hugo Chávez, y en respuesta, Uribe empezó a buscar el ingreso de Colombia a la OTAN. Ya en el 2013, bajo el gobierno de Santos empezó la cooperación efectiva, con el entrenamiento de miembros de las fuerzas armadas colombianas en academias militares de Alemania e Italia.

Pero a partir de 2015 las relaciones de Colombia con la OTAN fueron más allá del entrenamiento. La Armada de Colombia participó en operaciones en África contra la piratería marítima. La tarea bien hecha de Santos como agente del imperialismo, en el terreno militar, dió sus frutos. El buen alumno, es admitido en el círculo de confianza del imperialismo.

El presidente Juan Manuel Santos, Nobel de Paz, es quien termina formalizando la entrada de Colombia como Socio Global de la OTAN, lo que signi-



fica que es el primer estado de América Latina que ingresa a este tratado. Esto significa que Colombia estrechará lazos de cooperación militar, sobretodo en el intercambio de información de inteligencia, entrenamiento y tecnificación de las fuerzas Armadas, y la “exportación” de la experiencia militar de más de 50 años combatiendo a las guerrillas y ejerciendo violencia contra la población, experiencia altamente valorada por la actual doctrina militar del imperialismo enfocada en la llamada “guerra contra el terrorismo”.

Pero las consecuencias del ingreso de Colombia a la OTAN van más allá de intercambio de información y entrenamiento. A nivel interno, se profundizará la doctrina de la lucha contra el terrorismo ejercida por Estados Unidos y sus socios, política que incluye no sólo el combate a las organizaciones y países

enemigos de Estados Unidos, sino que procesos como las migraciones, los movimientos sociales son también percibidos como amenazas terroristas.

En tiempos de supuesto postconflicto, en vez de reducir el aparato militar, este será cada vez más tecnificado, y dirigido a enfrentar tanto las amenazas internas como a ser mecanismo de disuasión para los pueblos vecinos. Colombia ha sido conocida en el continente como “el Israel de América Latina” por ser el país de confianza de Estados Unidos en una región inestable políticamente, en la que en las últimas décadas han caído gobiernos, y han existido gobiernos que no son de plena confianza del imperialismo. En ese marco el Estado Colombiano, como socio global de la OTAN, se convierte en una amenaza para todos los pueblos de América Latina.

OCDE: ¿Buenas prácticas con los trabajadores?

La OCDE es un organismo internacional multilateral encabezado por el imperialismo norteamericano y sus aliados estratégicos, entre ellos Israel. Su objetivo es promover políticas en los países miembros que garanticen la aplicación de planes políticos y económicos comunes a largo plazo, en función de los intereses económicos de la burguesía manteniendo la división mundial del trabajo entre países, que favorece por supuesto a la burguesía de los países imperialistas.

Para aceptar la adhesión de Colombia como miembro pleno de la OCDE, se requirió un proceso de permanente seguimiento y evaluación por parte de

los demás países miembros en cabeza de Estados Unidos, de la implementación de políticas públicas que se han definido por el organismo como “buenas prácticas”.

Salud, educación y pensiones en jaque

En el informe “Revisión de políticas nacionales de educación, la educación en Colombia”, se evalúan las políticas y prácticas colombianas en materia de educación, las compara con estándares establecidos por la OCDE y las orienta para enmarcarlas en aquellos estándares. De manera similar sucede con el informe sobre Salud del 2015. El balance de

estas dos evaluaciones es similar para la OCDE: los gobiernos de la última década han venido aplicando políticas sobre estos dos sectores, las cuales son calificadas como positivas, y a pesar de reconocer limitaciones, propone profundizar en la aplicación de las mismas y en su eficiencia, es decir de las políticas neoliberales de privatización de los servicios.

En pocas palabras: la OCDE considera como *buenas prácticas* la aplicación de políticas en el sector de la educación como *Ser pilo paga*, el *Acuerdo por lo superior 2034*, la implementación de la jornada única, etc., las cuales profundizan la crisis financiera de las universidades públicas, enriquece a las entidades financieras con la proliferación de créditos, le dan vía libre al ánimo de lucro en la educación y someten a los profesores y trabajadores de la educación a peores condiciones laborales, lo que compromete la calidad académica y la educación como derecho. De igual forma en el sector salud la OCDE considera *buenas prácticas* el sistema neoliberal de las EPS, que convirtió el derecho a la salud en un negocio redondo y negligente.

Sin embargo, para la OCDE el sector salud y de la educación no es su *pez gordo*. Una de las *buenas prácticas* que Colombia tiene que adoptar siendo miembro pleno del organismo, es la reforma pensional, la cual está orientada fundamentalmente en acabar los fondos públicos de pensión fortaleciendo los fondos privados; en aumentar la edad necesaria para acceder a la pensión (de 62 a 67 años, con nivelación para las mujeres), y en aumentar la cantidad de semanas cotizadas para completar un total de 30 años. De esta forma, uno de los pocos derechos que aún conservan algunos trabajadores entraría en profundo detrimento afectando su calidad de vida. Igualmente se anuncia una reforma a la justicia.

La OCDE solo favorece a la burguesía

Ahora bien, ¿por qué estas políticas – que ponen en detrimento por lo menos tres derechos de los trabajadores y sus familias: salud, educación y pensión – son consideradas como “*buenas prácticas*” para la OCDE? Porque efectivamente son buenas prácticas para las grandes empresas nacionales y multinacionales, y para las entidades financieras, son ellos –y no los trabajadores– quienes se benefician económicamente con la implementación de las políticas que orienta la OCDE. No por nada la entrada de Colombia a la OCDE ha sido anunciada *con bombos y platillos* por la prensa burguesa, el gobier-

no y los funcionarios del organismo, pues son ellos quienes representan aquellos intereses. En conclusión: la OCDE impulsa buenas prácticas con la burguesía y el imperialismo y no con los trabajadores.

De esta manera, bajo el discurso del desarrollo del país, el imperialismo ejerce por medio de la OCDE un profundo control político y económico. Esto junto con la simultánea entrada de Colombia a la OTAN, son las dos caras de la moneda de la política del imperialismo para Colombia. Para la entrada de Colombia a la OCDE han sido fundamental los acuerdos con las Farc, pues con la desaparición de la guerrilla ha aumentado la confianza inversionista; probablemente por orientación de la OCDE la implementación de los *Acuerdos* llegue a “*buen término*”, por supuesto en función de los negocios

No todo está perdido

Lamentablemente el ingreso a la OTAN ha pasado impune. A la burguesía criolla le enorgullece ser Socio Global de la OTAN, por eso desde hace más de un año aprobaron en el Congreso el ingreso de Colombia al tratado. Esto no es extraño teniendo en cuenta la larga historia de subordinación al imperialismo. Ahora, si bien el acuerdo de adhesión a la OCDE ya fue firmado por el presidente Santos, aún falta la ratificación por parte del Congreso para formalizar completamente el proceso. Sin embargo, con una composición mayoritaria de representantes directos de los intereses de la burguesía, probablemente el recién elegido Congreso vote en su mayoría a favor.

Es lamentable que quienes deberían comandar la oposición a esta nueva entrega de la soberanía, han pasado de agache. En medio de la campaña electoral, el rechazo a ambos anuncios apenas fueron cuestionados por algunas declaraciones de organizaciones sindicales, organizaciones políticas y de algunos dirigentes y figuras públicas de la izquierda. En el caso



La OCDE reúne a los grandes representantes de la burguesía mundial.

del entonces candidato Gustavo Petro se limitó a declaraciones evasivas, sin expresar una posición categórica. Para ser consecuente con el clamor de los millones de trabajadores que lo apoyaron con su voto anhelando un cambio, y con su intención de encabezar una radical oposición desde el Congreso y las calles, debe expresarse rotundamente en contra del ingreso de Colombia a la OCDE y dar la batalla por revertir la adhesión de Colombia a la OTAN apoyándose en la movilización.

Es necesario que la conciencia y la acción antiimperialista renazcan en los trabajadores y las masas. No podemos permitir que el imperialismo avance en sus planes económicos y militares, lo que no solo se expresará en un fortalecimiento descomunal de la miseria y la represión en Colombia, sino que significará una nueva amenaza a los pueblos de América Latina, en medio de las crecientes convulsiones en que ni los gobiernos de derecha ni los supuestamente alternativos logran contener las protestas y la movilización contra los ataques al nivel de vida de los más pobres.

Igualmente se hace imperativo que el Encuentro Nacional Obrero y Popular que proponemos discuta y vote un plan de acción que incluya la reversión del ingreso de Colombia a la OCDE y la OTAN; frenar las políticas que por medio de ellas se aplican en contra de los trabajadores y la mayoría de la población. Los trabajadores argentinos ya han dado el primer paso al enfrentar en las calle la reforma pensional, es hora de que los trabajadores colombianos salgan a la escena.

¿Qué es la OTAN?

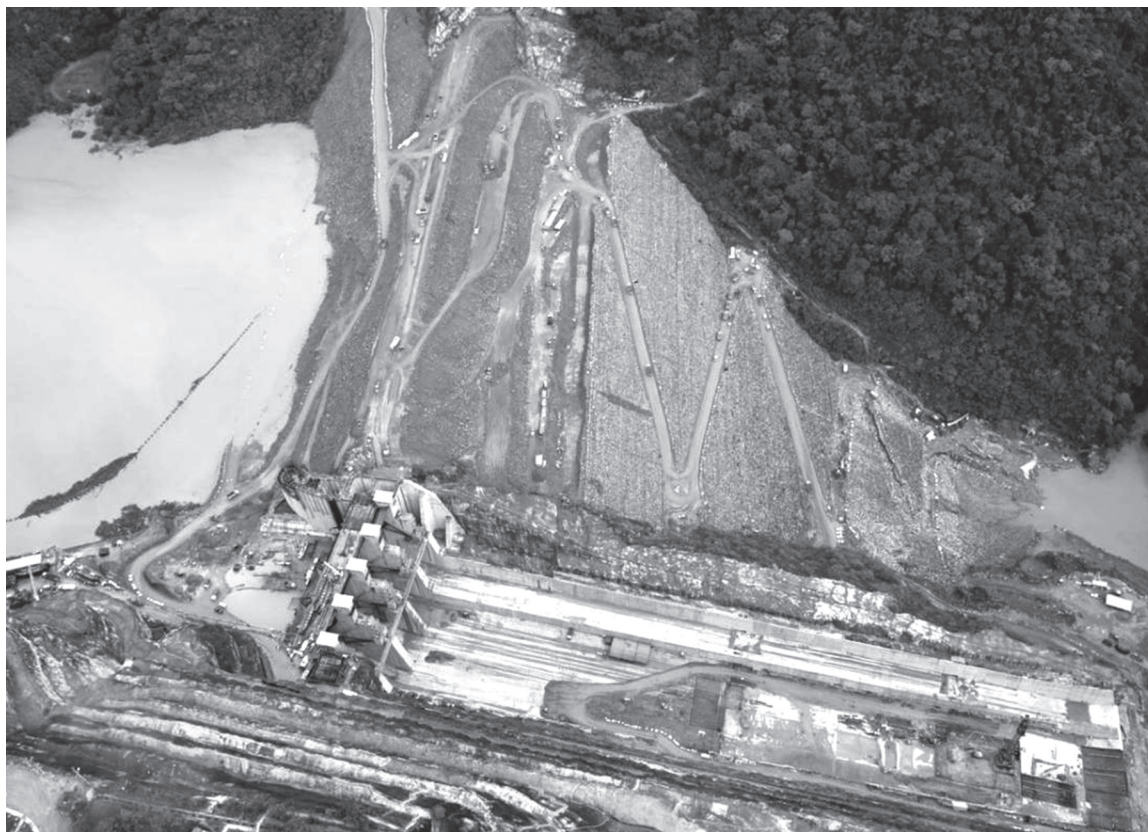
La OTAN es un tratado militar suscrito por las potencias imperialistas de Estados Unidos y Europa occidental luego de la segunda guerra mundial. Este tratado tenía el objetivo de contener el avance del ascenso revolucionario luego de la derrota del nazismo en el este europeo, y constituyó la principal alianza de carácter militar del imperialismo. Este pacto fue respondido por la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia, en el que la burocracia estalinista comandada por Nikita Jrushov hizo un acuerdo militar con sus aliados, con el que consolidó su

influencia en los nacientes estados obreros. Luego de la disolución de la URSS en los noventa, el Pacto de Varsovia fue disuelto y la OTAN pasó en consecuencia a ser la alianza militar más poderosa del mundo.

Desde ese momento la OTAN paso de ser un arma disuasiva del imperialismo a un instrumento de intervención y agresión militar. Desde los años noventa la OTAN ha participado en acciones militares garantizando los intereses del imperialismo en la antigua Yugoslavia, en Afganistán, en Irak.

Cuando el capitalismo desborda la vida

Hoy las horas cuentan para los vivos y los muertos. Hidroituango, una obra faraónica de 11 billones de pesos –es decir once veces el presupuesto de educación o 24 veces la destinación de salud para Medellín en 2018–, desde su diseño, su construcción, hasta su manejo, ha estado sujeta a una maraña de corrupción, despotismo, ineficiencia y bajos resultados; dejando en el camino muertos, despojo y tragedia, que hoy se resume en miles de campesinos viviendo bajo el acecho de una avalancha apocalíptica. En los 17 municipios afectados, hoy 120.000 personas corren riesgo de una tragedia, pero ya desde su construcción significó un altísimo precio por desplazamiento de los campesinos a manos del paramilitarismo.



Fotografía de la represa en el punto más álgido de la emergencia.



Hipólito

El Cauca indomable encadenado

Nunca se debió intervenir el Río Cauca, en un tramo encañonado, donde las montañas son cortadas por fallas geológicas, pues contra el intento de detener su curso el río buscará de manera física y natural destruir todo obstáculo. Esto es un hecho conocido por los gobiernos y todas las autoridades ambientales (ANLA) que autorizaron no solo una obra condenada al fracaso, sino que destruyeron un hábitat que involucra más de 100 mil colombianos, sacrificando además un área ecológica invaluable, que ni en cientos de años logrará su recuperación.

El río Cauca es la segunda arteria fluvial de Colombia. Pasa por más de 180 municipios en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Sucre y Bolívar. La cuenca hidrográfica de aproximadamente 63.300 km² es el lugar de diversas actividades productivas como

la industria azucarera, cultivo de café, generación de electricidad, explotación minera y agrícola. Su importancia reside en ser ribera para millones de pescadores, mineros y campesinos, que de a poco son desplazados por intervenciones económicas y de infraestructura, que alteran el equilibrio entre pobladores y naturaleza. La urbanización del país vierte en su caudal las aguas negras de ciudades como Popayán, Cali, Manizales, Pereira y Medellín. En el Valle del Cauca desde 1985 se dio la primera gran intervención de su curso con la represa Salvajina. “La dueña de la instalación es la Empresa EPSA, desde 2009 en manos colombianas por las instituciones Colener S.A.S., Inversiones Argos S.A. y Banco de Inversión Bancolombia S.A.”

La herida abierta

Desde la presidencia con Álvaro Uribe se inició la aprobación de planos

y contratos de obras en Ituango, que se inician en 2010, bajo la gobernación de Sergio Fajardo. “Según informa la Contraloría, los contratos no habrían cumplido los requisitos legales, estudios previos y demás exigencias para proceder con el multimillonario negocio con EPM, que estaba bajo la dirección de Juan Esteban Calle, quien ahora funge como presidente de ARGOS.” Además se reprimió todo intento de resistencia de los pobladores: “la construcción de Hidroituango, que siempre tuvo oposición por el arrase que conllevaría de flora y fauna, también cubriría gran número de fosas comunes de las 62 masacres perpetradas por los paramilitares que habrían dejado un saldo de más de 600 víctimas, las cuales quedarían inundadas por las obras en cuestión; esto inclusive llamó la atención del parlamento Europeo, que hizo un llamado para respetar los derechos de las víctimas y no afectarlas con la ejecución de la obra. Los “cubrimientos” que conllevaría la obra involucran inclusive a Luis Alfredo Ramos y al expresidente Álvaro Uribe Vélez junto a su hermano Santiago, pues varios cuerpos de las masacres de la Granja, el Aro e Ituango estarían en las zonas afectadas por la obra.”¹ Denuncias como las de la ONG Ríos Vivos, les ha costado la muerte de varios de sus integrantes; por eso es necesaria una acción decidida de todos los trabajadores de Colombia y el mundo para detener este y nuevos desastres que engendra el capitalismo.

El capital internacional tras las inversiones de EPM

Todos los gobiernos desde Pastrana, Uribe, Santos, se empeñaron en llevar a cabo la megaobra, pues los compromisos de interconectar el sistema eléctrico con Centroamérica, son de vital interés para las multinacionales y la banca imperialista². EPM figura como “empresa industrial y comercial del Estado”, de propiedad del Municipio de Medellín y presta los servicios de energía eléctrica, gas por red, agua y saneamiento.”³ Su funcionamiento depende de las facturas de servicios públicos, por lo que se ha transformado en un ente público que contrata a terceros y se asocia para incursionar en el mercado nacional e internacional de generación de energía eléctrica. “Las inversiones de las filiales del Grupo EPM entre 2017 y 2020 serán de \$4,1 billones, con un 76% para los negocios de energía y un 24% para los de aguas. Geográficamente el 47% se invertirá en Colombia y el 53% restante en Centro y Sur América. Con los \$6,5 billones de EPM Matriz, la inversión to-

tal del Grupo EPM ascenderá a \$10,6 billones en el próximo cuatrienio, de los cuales el 80% se hará en Colombia¹. Es decir, los manejos de interés político y empresarial de EPM sólo han servido a la banca nacional y los grandes constructores, lo que se demuestra con la profunda pobreza que reina en todas las subregiones de Antioquia, desmintiendo todo falso concepto de que existe una superioridad “paisa”.

Movilización por un plan de reconstrucción de los municipios afectados

Para los revolucionarios no es suficiente la denuncia pública, desde el PST nos transformamos en voz y puño de las poblaciones afectadas, las cuales desde ya deben exigir al Gobierno de Santos un decreto de reconstrucción de las poblaciones y desmonte de la represa. Los trabajadores no controlamos el gobierno nacional, pero conocemos la lucha social y la movilización como vía de fuerza para imponer nuestras reivindicaciones a este gobierno y al próximo de Iván Duque (quien sirve de escudero a Álvaro Uribe) y a todos los empresarios y políticos implicados en la construcción y ejecución de Hidroituango.

Exigimos una ley que permita reubicar a las poblaciones que están amenazadas por la avalancha. Que se les entregue nuevas viviendas y tierra a los campesinos, en terrenos fértiles y seguros. Que se inhabilite políticamente a todos los implicados en las decisiones de planificación y ejecución de las obras, por lo que involucra a todos los gobiernos y sus ministros desde el de Andrés Pastrana. Lo mismo para los gobernadores Antioquia y los gerentes de EPM involucrados en la ejecución y contratación.

Se debe iniciar el desmonte de la presa y el retorno a su cauce normal del Rio Cauca, evitando más intervenciones en el río. Toda esta tragedia debe ser causal de demandas internacionales contra los inversores financieros por patrocinar la violencia paramilitar y destruir el ecosistema natural, lo que no obliga al gobierno a responder por deudas e inversiones, que se piensan descargar a través del incremento de las tarifas en toda la población colombiana.

Del capitalismo y del gobierno no esperamos ninguna actuación correctiva, ni de enmienda, solo podemos confiar en la lucha por un gobierno obrero, popular y campesino, que democráticamente disponga de sus recursos y defina de manera planificada cómo desarrollar el país y proteger al mundo de la voracidad capitalista.

1 <https://voces.com.co/por-que-fue-involucrado-sergio-fajardo-con-el-desastre-de-hidroituango/>

2 <http://www.iirsa.org/Page/Detail?id=80&menuItemId=81>

3 <https://www.epm.com.co/site/home/institucional>

4 https://www.epm.com.co/site/Portals/6/Presupuesto_2017.pdf

Atrás la persecución sindical en Tubos del Caribe - Tenaris

Producto de las condiciones de seguridad en que laboraban más de 180 trabajadores contratados por la empresa como parte del programa de primer empleo, una gran cantidad de estos compañeros decidieron afiliarse a Sintratucar. Como el sindicato denunció ante el Ministerio del Trabajo esta situación aberrante, pues en esta empresa se trabaja con elementos altamente contaminantes y explosivos y no se cuenta con un sistema contraincendios adecuados, la empresa comenzó a despedir a estos trabajadores o los amenazaba con no renovarles el contrato por seis meses, pues el sindicato se aprestaba a presentar pliego de peticiones.



A partir del mes de noviembre de 2017, la empresa empezó a hacer disciplinarios, por HABER FUNDADO UN SINDICATO NACIONAL, desconociendo los derechos que están en nuestra constitución y en los convenios internacionales, sancionando con despidos al presidente y vicepresidente de SINTRATUCAR y al presidente del nuevo sindicato. A tres dirigentes sindicales que también participaron en la fundación, los suspendió por ocho días sin salario y al resto que no pertenecían a la junta directiva los sancionó con tres días sin salario, mostrando discriminación y desproporción en estas sanciones.

El sindicato presentó pliego en el mes de octubre y la empresa se negó a negociar, pues la propuesta que presentó la empresa, habiendo finalizado la etapa de arreglo directo, donde acudimos al ministerio porque no fue posible instalar la mesa de negociación y demandó la intervención de este ente, buscaba quitarnos derechos como la estabilidad laboral en época de crisis, el procedimiento disciplinario que garantiza derecho a la defensa y debido proceso, el ofrecimiento económico no se ajusta a la realidad financiera de esta multinacional y el tiempo de vigencia de este acuerdo por solicitud de la empresa alcanzaba seis (6) años, sin ofrecer nada extraordinario con la desaparición de los sin-

dicatos como condición, además reuniones con los trabajadores desinformando a los trabajadores no sindicalizados a quienes empezaron a decirles que la comisión negociadora del sindicato no tenía voluntad para negociar y estábamos buscando intereses individuales como era negociar los despidos y las sanciones que se llevaban hasta la fecha.

A la fecha están suspendidos sin salario TRES INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA el presidente de sintratucar Walberto Marrugo, el vicepresidente y secretario de sintratucar respectivamente Jairo del Río y Elías Zabaleta, acumulando 60 días sin salario, encontrándonos con una estrategia criminal como es acumular las suspensiones de días sin salario y aplicar estas sanciones con días hábiles, lo cual aumenta el número de días sin percibir remuneración, atentando contra el mínimo vital y la canasta familiar de nuestras familias.

Al cierre de esta edición de El Socialista, dos compañeros se encuentran en huelga de hambre y encadenados a la puerta de la empresa, exigiendo que cese la persecución en su contra. Llamamos a rodear esta huelga con la mayor solidaridad obrera.



J. del R

Atun Van Camps continúa masacrando laboralmente a los trabajadores

La empresa productora del atún Van Camps, ubicada en Cartagena continúa despidiendo a trabajadores enfermos. En esta ocasión, desde el 30 de mayo le comenzó a notificar a cerca de 30 trabajadores que laboran en esta empresa a través de la intermediadora laboral Atiempo Servicios SAS, la gran mayoría mujeres, madres cabeza de hogar, pero además enfermas con patologías de origen laboral, que fueron despedidos por justa causa. Todos estos trabajadores se encontraban bajo la figura del Artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, recibían remuneración sin laborar desde el 30 de octubre de 2015.



En esa ocasión los trabajadores realizaron una protesta pacífica en la empresa, ante un cierre ilegal realizado por la patronal. Fue un cierre ilegal porque la empresa nunca solicitó permiso, al Ministerio del Trabajo, para cerrar la planta, en una parada de producción que duró 20 días, esa vez acusó al sindicato Ustrial de organizar una toma ilegal y un paro en la empresa.

En el año 2016, las empresas solicitaron el despido de más de 130 trabajadores ante el Ministerio del Trabajo, pero mediante auto 280 del 16 de agosto de 2017, este ente gubernamental decidió archivar la investigación y la solicitud de despido por no encontrar pruebas que demostraran que los trabajadores fueron los que organizaron el supuesto paro.

Para estos despidos las empresas se apoyan en la nueva sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que le quita la facultad al Ministerio del Trabajo de autorizar el despido de trabajadores enfermos y plantea que los patrones pueden despedir por justa causa, sin acudir al Ministerio, pero acá se viola el principio de inmediatez, que plantea que para llamar a descargos o despedir por justa causa a un trabajador esta debe llamarlos en un término prudencial de 12 a 24 horas,

contemplados en las recomendaciones 116, 119 y el convenio 158 de la OIT.

Las organizaciones sindicales, Ustrial y Sinatrinal, han decidido realizar una campaña de denuncia nacional e internacional de este nuevo atropello de la empresa Seatech International INC y realizaran acciones de movilización en la ciudad de Cartagena, denunciando esta violación al derecho de asociación sindical y le exigen a la nueva vicepresidenta de la Republica, la señora Marta Lucía Ramírez, que tiene intereses económicos en esta empresa, que le diga a los colombianos si eso es lo que le espera a las mujeres madres cabeza de hogar con el “nuevo” gobierno de Iván Duque.

Es necesario unificar la lucha que se vienen realizando en forma dispersa por todo el país y en ese sentido le corresponde a las direcciones de las centrales obreras romper con la política de pasividad en que han sumido a la mayoría de las organizaciones sindicales en el país. Con los anuncios del nuevo gobierno, los trabajadores debemos convertir la votación por Gustavo Petro en acciones de lucha a nivel nacional.



Antonio Secato

Rechazo a los despidos en la ETB

El Partido Socialista de los Trabajadores (PST) rechaza la ocupación de las plantas de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), por parte de la Fuerza Pública, el 27 de junio, para obligar a los trabajadores a firmar una carta de retiro, mecanismo a través del cual despidieron más de 60 trabajadores.

Los trabajadores de la ETB vienen luchando contra la privatización de la empresa por parte del alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y contra la tercerización laboral. Esta medida represiva es en respuesta a la resistencia que han desarrollado los trabajadores e imponer la venta de la empresa estatal a un precio muy por debajo del real liquidando al mismo tiempo la planta de trabajadores directos y con estabilidad laboral y entregar la empresa con una planta completamente tercerizada.

Los trabajadores de la ETB necesitan la más amplia solidaridad y los trabajadores colombianos la unidad para luchar contra la tercerización laboral, en un momento en que el nuevo gobierno de Iván Duque arremeterá aún más contra la clase trabajadora, obedeciendo órdenes de la Organización Mundial del Comercio (OCDE), para cumplir los compromisos que el gobierno saliente de Juan Manuel Santos ha suscrito como condición para el ingreso de Colombia a ese organismo imperialista.

El comunicado Sinrateléfonos

Masacre laboral

Con lista en mano, al mejor estilo de una dictadura el día de hoy 27 de junio la administración de la ETB, en cabeza de Jorge Castellanos ha iniciado una masacre laboral sin precedentes. Conjuntamente con la Fuerza Pública se han tomado ilegalmente todas las instalaciones de las centrales amedrantando, intimidando y despidiendo trabajadores directos de la ETB.

A los trabajadores se les retuvo en sus puestos de trabajo, decomisando ilegalmente sus equipos móviles sin permitirles una asesoría, obligándolos de inmediato con ingenieros jefes y con la presión de la Fuerza Pública, a escoger entre un plan de retiro voluntario, o firmar un despido por terminación de contrato sin justa causa.

Ha iniciado la oscura noche y no podemos permitir que la amenaza, el constreñimiento, el asesinato, la persecución sindical sea la constante de estos gobiernos de turno. Denunciamos públicamente la administración Jorge Castellanos Rueda presidente, y Tatiana González Uscategui, vicepresidenta de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento, la forma vil, baja y engañosa contra los trabajadores y la organización sindical; hacemos un llamado a la clase obrera y en general a las fuerzas vivas del movimiento social colombiano a rodear a Sinrateléfonos y sus afiliados.



Necesitamos la unidad de los trabajadores para enfrentar el nuevo gobierno

Con el triunfo de Duque y el uribismo, se ha abierto en el país toda una ola de temores y advertencias de lo que vendrá para el movimiento sindical y los trabajadores. Estas van desde el aumento de la edad de pensión, la propuesta de convertir los sindicatos en bolsas de empleo con los famosos contratos sindicales, la reducción del salario mínimo porque para algunos burgueses es escandalosamente alto, etc.



Como los trabajadores argentinos, los colombianos debemos enfrentar el gobierno desde el primer día.

Lo único cierto es que con el ingreso de Colombia a la OCDE y los dictados del imperialismo a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los planes fundamentales del nuevo gobierno se han definido y pasan por una reforma tributaria, donde le quiere rebajar impuestos a los capitalistas y se los aumentarán a los trabajadores, tratarán de igualar todos los regímenes pensionales para que el capital financiero siga teniendo ganancias extraordinarias gracias al hambre que aumentarán a los trabajadores, habrá recorte en el gasto público lo que significará despidos de trabajadores del Estado y más precarización, entre otras.

Hagamos un encuentro nacional

Estamos convencidos que el “nuevo” gobierno no traerá nada bueno para los trabajadores. Todos los gobiernos anteriores han gobernado al servicio de los capitalistas y todas las leyes solo a ellos benefician, por eso Lenin hace más de un siglo dijo que los parlamentos y los gobiernos de la democracia son en últimas unas Juntas que administran los negocios de los burgueses.

Lo nuevo en la situación nacional, es que más de ocho millones de personas se expresaron contra el nuevo gobierno

y podríamos decir, que cerca de la mitad de los colombianos en edad de votar no tienen ninguna confianza en el gobierno de Iván Duque, por eso las direcciones de las centrales obreras, el nuevo dirigente de la oposición Gustavo Petro, así como el resto de organizaciones indígenas, estudiantiles y populares debemos convocar UN ENCUENTRO NACIONAL OBRERO Y POPULAR, que vote un plan de lucha y movilización contra los planes de Duque-Uribe y le ponga fecha a un Paro Nacional.

La direcciones de las centrales obreras deben romper con la política de concertación que es la que hoy tiene a los trabajadores en la más nefasta desmovilización. Debemos sacar las conclusiones de las luchas que se dieron en el pasado, donde la dirección de las centrales se dedicó a sacar declaraciones de apoyo a las luchas y no hicieron nada para que estas no fueran derrotadas. Es decir actuaron como los perros viejos que ladran pero echados en el piso y sin levantar la cabeza.

Por una nueva dirección para el movimiento sindical

Hoy está abierta la campaña electoral para las elecciones de la CUT, FECODE y otros sindicatos a nivel nacional. Los

candidatos del PST y las listas que apoyamos deben hacer el balance del comportamiento de los diferentes sectores que se mueven al interior de la central, que solo en los eventos, y para congratularse con sectores de base, dicen que existen al interior de la central dos sectores: el “clasista” y el “democrático” que en nada se han diferenciado durante todos estos años, pues llamaron a votar por Santos hace cuatro años y no hicieron nada contra el gobierno porque eso podía perturbar los diálogos de “paz”.

La crisis del sindicalismo colombiano, es la crisis de su dirección política y sindical. Una dirección que solo hace declaraciones de apoyo a los conflictos pero no organiza a los trabajadores para apoyar y unificar las luchas, como sucedió con las Madres Comunitarias, con los trabajadores de Avianca, con los maestros, y con los pobladores del Pacífico colombiano, pues se negaron a extender esa lucha y llamar a un Paro Nacional, única salida que habría derrotado los planes del gobierno de Santos.

Por eso llamamos a los sectores realmente clasistas, que nos pongamos al frente de unificar los conflictos, porque es la única forma de derrotar las políticas del gobierno y la patronal. Nosotros que llamamos a votar críticamente por Gustavo Petro, lo llamamos a que se ponga al frente de organizar la resistencia contra Duque en las calles, porque en el parlamento no vamos a lograr nada, no solo porque la mayoría de los parlamentarios son parte de los partidos burgueses que en las elecciones se colocaron bajo la sombra de Duque, sino porque ese organismo está a favor de los capitalistas.

Ya es hora de que los obreros y los trabajadores formemos nuestro propio partido, un partido con independencia de la patronal y sus partidos, que sepa hacer unidad de acción en la lucha pero que confíe en su propia fuerza y construya sus propios dirigentes, que sea capaz de formar una gran organización internacional que le permita articular la lucha en el continente y en el mundo contra este capitalismo explotador.



Antonio Secato

“**Debemos convocar UN ENCUENTRO NACIONAL OBRERO Y POPULAR, que vote un plan de lucha y movilización contra los planes de Duque-Uribe y le ponga fecha a un Paro Nacional.**”

Argentina:

Sigamos en las calles para imponer el aborto legal

El pasado 14 de junio pasará a la historia en Argentina, una movilización de más de un millón de personas, con las mujeres y jóvenes desbordándolo todo, aguantó el frío y toda la noche para festejar la media sanción del aborto legal. Las inmensas movilizaciones en todo el país, las tomas de las escuelas secundarias, la vigilia en las inmediaciones del Congreso, lograron un primer triunfo: imponer que los diputados se pronunciaran por el aborto legal en Argentina. La posibilidad de que se legalice el aborto en nuestro país es un gran paso para las mujeres de este país y de todo el mundo que miran que es posible avanzar en este derecho, sobre todo para las trabajadoras y pobres que son las que mueren por abortos clandestinos.



PSTU-Argentina

Primera conquista de la lucha

Muchos analistas, dirigentes políticos y referentes feministas están hablando de las nuevas especulaciones sobre los votos de los Senadores. Colocan en la cámara alta la responsabilidad de terminar de dar este derecho, apelando a que tomen conciencia. Pero las mujeres y muchos laburantes no tienen ninguna confianza en esos parlamentarios. Saben que deben seguir en las calles para garantizar la legalización del aborto. El gran paso adelante que significó la media sanción en Diputados, no responde ni al lobby, ni a la “sororidad” (hermandad de mujeres) en el Congreso. Sólo es producto de la movilización y la lucha en la calle. Las pibas y los pibes fueron el ejemplo, no sólo estuvieron en las calles por semanas, haciendo pañuelazos y festivales sino que fueron más allá y pasaron a la acción directa, tomaron sus escuelas y facultades para imponer la media sanción.

Capítulo aparte merecen los diputados que responden al bloque kirchnerista, esos que dicen haber entendido ahora la importancia de este derecho, pero que mientras tuvieron mayoría parlamentaria durante el gobierno de Cristina impidieron ¡siete! veces que el debate llegara al recinto, cuando podían usar el propio gobierno y su influen-

cia política para aplicar el aborto, darle presupuesto y lograr que se aplicara, no lo hicieron. La lucha en la calle los obligó a votar a favor, es de una caradurez absoluta que ahora Cristina diga que “está cambiando de idea” cuando se manifestó en contra durante sus dos periodos de gobierno.

Golpe duro a la Iglesia

La Iglesia Católica se ubicó a la cabeza de dirigir el movimiento que se autodenomina “pro-vida”. Utilizó sus influencias políticas y económicas y apeló también a la movilización para impedir que se avanzara en la posibilidad de que las mujeres definan su maternidad y dejen de morir clandestinamente. Esa Iglesia que recibe subsidios millonarios del Estado, que impide que se imparta educación sexual en las escuelas, que apoyó a la dictadura militar en nuestro país, que prohíbe el uso de anticonceptivos a sus fieles, habla de defender la vida y ante la derrota que sufrieron por la media sanción, salieron a acusar a todas las mujeres que se manifiestan a favor del aborto legal como “nazis de guante blanco” según las propias palabras del Papa Francisco. ¡Que ironía que ellos que avalaron el régimen nazi acusen a las mujeres de fascistas! No podemos seguir

permitiendo la injerencia de esta institución, que protege pedófilos, en nuestra salud y educación, para terminar con esta influencia nefasta debemos tener inmediata separación de la Iglesia del Estado.

Sigamos en las calles, ninguna confianza en el Congreso

Este momento histórico abrió el debate en todos lados, las casas obreras empiezan a romper con el silencio y siguiendo las noticias en la televisión se suman a debatir. La legalización del aborto, en condiciones de higiene, salubridad, de manera gratuita y libre en el hospital es todavía una tarea a cumplir, es un derecho que debemos imponer con la fuerza de la movilización y luchando junto a toda la clase trabajadora.

La lucha por el aborto legal no es exclusividad de las mujeres, no se conseguirá acordando con las representantes femeninas de los partidos patronales, las mismas diputadas y senadoras de Cambiemos y el PJ que hoy se llaman “sororas” y hablan en nombre de las pobres, son las que votan y aplican el ajuste, así como también las diputadas que votaron en contra fueron la mitad de las legisladoras. La ley que presentó la campaña nacional por el derecho al aborto, sufrió modificaciones para poder “acordar” con estos sectores. Quieren permitir que los médicos puedan negarse a través de la “objeción de conciencia”, y si la fuerza está puesta en las negociaciones y no en las calles seguirá retrocediendo el ya limitado proyecto original.

Desde el PSTU y Lucha Mujer redoblabamos las fuerzas para seguir impulsando la lucha por el aborto legal. Salimos a las calles y gritamos de alegría junto a todas las mujeres que a pesar del frío estaban en la lucha, pero seguiremos diciendo que para garantizar este derecho debemos pelear junto a toda la clase obrera. El paro general que la CGT llamó para el 25 ¡también debe ser por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito!, las direcciones que dudan de enfrentar al gobierno y que demoraron la huelga general tienen la obligación de incluir este derecho y no seguir dejando solas a las trabajadoras como hicieron el 8M.

Para superar los límites de la propia ley, para imponer el aborto legal, las trabajadoras no podemos depositar confianza en nuestras verdugas, tenemos que buscar aliados en nuestros compañeros de trabajo y no en las mujeres de la burguesía. Por eso para imponer el aborto legal, seguro, gratuito y en el hospital, tenemos que salir junto a toda la clase obrera para luchar contra el ajuste, tirar abajo el plan de hambre y hacer que Macri y el FMI se vayan, para que gobernemos los trabajadores que somos los únicos que podremos garantizar los derechos de las mujeres.



Marxismo Vivo:

Argentina | Un
ascenso general de la
lucha de las mujeres



Lea artículo completo en <https://bit.ly/2KnVMSd>

¿Por qué Trump está separando familias de inmigrantes?

La nueva política migratoria ha sido llamada “tolerancia cero” y con razón. Antes, las familias que entraban ilegalmente a los Estados Unidos tenían derecho a pedir refugio, alegando que corrían el riesgo de volver para sus casas. En esos casos, eran encaminadas para un ala especializada de la justicia estadounidense, responsable por los casos de migración.



Con la reciente determinación, la entrada ilegal a aquel país pasa a ser tratada como crimen común. Con eso, los adultos detenidos, intentando entrar a los Estados Unidos, son encaminados directamente para prisiones federales. Los niños, que no pueden ser presos junto con sus padres, van a parar a campos de migrantes. Al comienzo de esta semana, videos y audios de niños llorando y llamando a sus padres viralizaron en Internet.

Irónicamente, Trump declaró este lunes (18 de junio) que “los EE.UU no van a convertirse en un campo de migrantes”, pero es justamente eso lo que ha hecho con su política. En las últimas cinco semanas, el número de niños separados de sus padres ya ronda los 2.500. Familias de varias nacionalidades están siendo alcanzadas por la nueva política, pero las más afectadas son las mexicanas.

Hay familias brasileñas que también fueron separadas. Pero el gobierno Temer, siervo del imperialismo, no ha declarado nada hasta ahora por miedo a indisponerse con Mike Pence, vicepresidente de los EE.UU, que visitará Brasil la próxima semana.

El muro de Trump

La cuestión de los inmigrantes fue un tema central en las elecciones estadounidenses de 2016. Las promesas de la campaña de Trump incluían adoptar una política de intolerancia para este asunto. Una de ellas era construir un muro militarizado en la frontera EE.UU-México para impedir la entrada ilegal de personas al país.

Por ser muy controvertida, la construcción del muro no tuvo éxito y no consiguió recaudar los fondos necesarios su ejecución. Lo que Trump intenta hacer ahora es, justamente, usar el drama de las familias como presión sobre el

Congreso, para aprobar una ley de inmigración más rígida y también para que el Congreso vote la aprobación del presupuesto para la construcción del muro.

En otras palabras, el gobierno reaccionario de Donald Trump usa el drama de las familias inmigrantes como moneda de cambio, o mejor, como forma de extorsión contra su propio Congreso. Eso solo es posible porque la separación de los niños de sus padres tiene amplia repercusión en la opinión pública y en la prensa, incluyendo la internacional. Según una investigación de la CNN, 59% de los estadounidenses desapruaban la separación de las familias.

Si bien es cierto que Donald Trump cumple un papel nefasto con su política de intolerancia hacia los inmigrantes, tampoco se debe esperar nada de la oposición Demócrata. La votación de dos proyectos de reforma migratoria ya está marcada para el próximo jueves.

Ningún ser humano es ilegal

La crisis migratoria por la que pasa el mundo hoy –la peor de su historia– no es una casualidad. Es el resultado de la crisis económica mundial, de la profundización de la desigualdad, de la recolonización de los países periféricos y de las numerosas guerras y conflictos armados en curso en el mundo de hoy. Guerras que, incluso, son apoyadas y financiadas por el propio imperialismo, que muchas veces interviene directamente en ellas. En última instancia, no es posible acabar con la crisis de los refugiados sin luchar contra el imperialismo, que prefiere garantizar la libre circulación de sus mercancías y capitales y criminalizar a aquellos que buscan recomenzar la vida en otro lugar.



Romerito Pontes
junio 25 de 2018

¡Abajo Ortega! ¡Fuera dictador asesino!

Bernardo Cerdeira, junio 11 de 2018

Cada día que pasa la cifra de muertos en Nicaragua, producto de la represión del gobierno, aumenta en forma significativa. El presente artículo fue escrito el 11 de junio y se reportaba la muerte de 76 personas en las protestas de la población contra el dictador Daniel Ortega, al 22 de junio la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) reporta la suma de 212 muertos y 1.337 heridos. Dos días después, el 24 de junio se reportan 8 muertos más.

Cuando el 18 de abril los estudiantes nicaragüenses comenzaron a movilizarse en las calles para protestar contra la reforma previsional social en apoyo a los jubilados, nadie podía decir que ese movimiento se transformaría en una verdadera revuelta popular contra el gobierno de Daniel Ortega, de la vicepresidenta (y su esposa) Rosario “Chayo” Murillo, y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La reacción del gobierno a las primeras movilizaciones fue brutal. La policía reprimió violentamente a los estudiantes usando armas de fuego, ayudada por los grupos armados de la Juventud Sandinista y las llamadas “turbas sandinistas”, grupos paramilitares ligados al gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza, hasta ahora, 76 muertos por las fuerzas de represión y centenas de heridos y presos.

La represión tuvo efecto inverso: los estudiantes ocuparon las universidades y las escuelas técnicas; se levantaron barricadas en los barrios populares; la población reaccionó con armas improvisadas, se incendiaron edificios públicos y se multiplicaron las manifestaciones en las principales ciudades, siendo que la jornada más expresiva llegó a reunir a más de 200.000 personas en todo el país.

El gobierno retrocedió en la reforma de la Previsión, pero las movilizaciones pasaron a tener un objetivo más importante: derrocar el gobierno dictatorial. La consigna central de todas las manifestaciones pasó a ser: “¡Fuera Ortega!”.

El presidente está tratando de salvar su gobierno desmovilizando la lucha por medio de un diálogo nacional propuesto por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la principal organización de la burguesía nicaragüense. Ambas organizaciones no ponen como condición la salida de la familia Ortega del poder. No obstante, el diálogo no es el objetivo de Ortega, sino sí ganar tiempo para golpear el movimiento estudiantil y popular y conservar el poder.

La situación de Nicaragua y la lucha popular para derrocar la dictadura de la pareja Ortega y del FSLN divide aguas en la izquierda. La llamada izquierda bolivariana más extrema afirma que la revuelta popular sería articulada por la CIA y por la derecha nicaragüense con el objetivo de desestabilizar a más un gobierno progresista, a ejemplo de Venezuela y del pretendido golpe en el Brasil.

¡Nada más falso! El gobierno Ortega es una dictadura sanguinaria, explotadora y entreguista del país al imperialismo. Por eso, toda la izquierda latinoamericana está obligada a elegir un lado: o con la heroica lucha del pueblo nicaragüense contra la represión y la explotación o con una dictadura que intenta esconderse atrás de una falsa fachada progresista.

Nosotros ya tenemos un lado: el de los estudiantes, campesinos y trabajadores que están luchando en las calles.

Argentina:

Paro nacional activo e imponer el Plan de Lucha

Al cierre de esta edición se desarrollaba la tercera huelga general contra el gobierno de Mauricio Macri con un alto porcentaje de participación de los trabajadores, empezando por el sector del transporte y con ello dificultaba el desplazamiento de la población a sus sitios de trabajo.



PSTU-B

junio 21 de 2018

Se termina el tiempo para vacilaciones. Después de tantas penurias en nuestras familias, tenemos la oportunidad de expresar en forma contundente nuestro repudio al plan económico y a las medidas que viene tomando Mauricio Macri.

Por eso este lunes 25 no tenemos que quedarnos en casa como nos dice la CGT, tenemos que salir a las calles, para golpear como un solo puño a las grandes empresas, bancos, mineras, petroleras, sojeras, que se han llenado los bolsillos a costa de nuestra hambre.

No solo hay que garantizar el paro, sino que se tiene que organizar la bronca desde el lugar en donde nos encontremos, a través de comités de lucha zonales o regionales, de encuentros o coordinadoras de fábricas o gremios, es una de las tareas concretas para avanzar en la perspectiva de un plan de lucha que dé continuidad y sobre todo unir todos los reclamos en un pliego común.

El Gobierno da cuenta de su crisis con la salida de ministros

La salida de ministros y cambios en el Banco Central refleja la profunda crisis que está pasando “el mejor equipo de los últimos 50 años”. Anuncian los cambios un fin de semana como algo programado cuando todos sabemos que fue todo lo contrario, desde las elecciones de octubre, cuando ganaron las elecciones y pisaron el acelerador del plan Macri, cho-

caron con la resistencia obrera y popular. En definitiva la lucha de clases es la que pone en descubierto el fracaso del Gran Acuerdo Nacional del año pasado.

Es ese desgaste el que hace que el odiado Aranguren se tenga que ir, junto con Cabrera y Sturzenegger.

La letra chica del fondo: Reforma Laboral y ajustes.

A medida que se conocen los alcances del acuerdo, comienzan a salir a la luz las condiciones por la cual se otorgaría el préstamo de 50 mil millones. No solo que nos monitoreen o que perdemos cualquier indicio de soberanía económica, sino que además continuarán con el ajuste en el estado, la Reforma Laboral y sobre todo la baja de salarios para poder ser “competitivos” a nivel mundial.

Reabrir la pauta salarial por 40% para todos

La suba del dólar y la política energética hace que los precios suban no solo por la devaluación del peso que este año pasó de \$20 en febrero a \$28 en junio (40%) sino que la importación de petróleo hace que los combustibles suban a precio internacional llevando a aumentar los precios de alimentos e indumentarias.

Las consecuencias de esto la sentimos día a día en nuestras casas: el sueldo alcanza cada vez menos, obligándonos a cambiar lo que comemos por los precios de las cosas, a fijarnos como ahorrar en transporte y en servicios ¿cuánto más podemos seguir ajustando los cinturones de nuestras familias?

Por eso hay que romper todos los acuerdos firmados por los gremios por el 15%. No alcanza ni el 5% propuesto

por el Gobierno, ni siquiera una revisión a diciembre. Debemos reabrir la pauta salarial para todos los sectores privados, estatales, jubilados y ayuda social. Hay que arrancar con asambleas y lucha por lo menos una recomposición salarial del 40% para este 2018.

Fuera Macri, el FMI y el G20, por una salida obrera

El hambre que pasamos no podemos aguantarlo hasta las elecciones del año que viene. La oposición tanto del PJ como del kirchnerismo nos dicen que hay 2019 para revertir esto, otros nos dicen que debemos construir una alternativa de cara a las elecciones como el triunvirato piquetero e incluso los frentes de izquierda.

Nosotros los socialistas del PSTU consideramos que es equivocado esperar o apostar al 2019, es ahora cuando debemos impulsar la lucha, no solo contra las medidas económicas sino también contra el acuerdo del FMI y el G-20 que nos ata al imperialismo y a las multinacionales. Debemos plantear que Macri se tiene que ir, porque justamente no hay plan B. Por eso el camino del 18 de diciembre se tiene que retomar con más fuerza y esa es la principal tarea que el movimiento obrero debe realizar para tener un plan económico obrero con la perspectiva de un gobierno de los trabajadores y el pueblo

Por una Asamblea Nacional de Trabajadores

Para unir todos los reclamos y dar el impulso que se necesita, hace falta una Asamblea Nacional de Trabajadores, que incluya a todos los que dicen enfrentar al Gobierno y rechazan al FMI, en ella deben estar la Corriente Federal, los camioneros, las CTAs, los movimientos sociales y toda la izquierda,

Allí con mandatos de base de miles de asambleas podremos tener un pliego único que abarque desde las libertades democráticas, el aborto legal y gratuito, el aumento salarial y el cese de despidos y suspensiones.

El encuentro que se hace este 23 en Lanús por el SUTNA y otros gremios independientes, puede ser un paso, pero para realmente ir en ese sentido debe tener la iniciativa de confluir con otros encuentros como el de Rosario (aceiteros, ATE, AMSAFE) o el que impulsó Astilleros de Río Santiago. En fin, ponerse a la cabeza que se convoque a la asamblea nacional como un frente único de lucha y no en un espacio limitado alrededor de un sector de izquierda.

